

DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS...

LA DERECHA GALLEGA ENTRE LA TRANSICIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Julio Prada Rodríguez
Universidad de Vigo

Del revisionismo neofranquista a la pérdida del centro

Cuando en octubre de 1969 se produce la salida de Manuel Fraga Iribarne del Gobierno, el debate acerca de las Asociaciones Políticas comienza a cobrar actualidad. Tanto que el propio Carrero Blanco se sintió en la obligación de acudir a la metáfora del «enfado del señor Fernández» para insistir en la condena del sistema demoliberal y en las virtudes de la democracia orgánica para deshacer equívocos sobre el significado del «contraste de pareceres» a que aludía la Ley Orgánica del Estado.¹ Sin embargo, la cuestión de las diferentes «sensibilidades» en el seno del Movimiento dividiría aún más a la clase política a medida que se acentuaba el declive físico de Franco. Incluso conspicuos falangistas de primera hora, como Girón de Velasco, reconocían la existencia de al menos tres tendencias que deberían hallar algún cauce de expresión conforme a lo dispuesto en las Leyes Fundamentales: la Falange, la Democracia Cristiana y los que él denominaba «independientes», representados por los tecnócratas.²

Es probable que la resolución de la crisis gubernamental hiciera reflexionar a Fraga sobre la necesidad de medir mejor sus tiempos. Desde luego sirvió para consolidar su imagen aperturista cuando, en su intervención ante el Consejo

Nacional del Movimiento (CNM) el 15 de diciembre, se opuso con otros doce consejeros a lo que quedaba del reformismo endógeno y vinculó su resultado con la quiebra de las expectativas de apertura hasta dar lugar a lo que se conoció en su día como la «primavera de Fraga».³ Y tal vez por ello, a pesar de los muchos que, coincidiendo con su aceptación de la Embajada en Londres en 1973, lo incitaban a «dar el salto» a la arena de las Asociaciones, actuó con marcada prudencia en aquellos meses trascendentales que median entre el asesinato de Carrero Blanco y la muerte del Caudillo. Era lógico, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias existentes a la hora de fijar los límites de su acción política y el número de las que deberían ver la luz para representar adecuadamente dichas «sensibilidades». No era posible, si quería continuar como abanderado del reformismo, admitir el estrecho corsé que le ofrecía el Gobierno, en el que no tenían cabida ni el reconocimiento de las libertades básicas que regían en Europa Occidental ni una cámara elegida por sufragio universal.

De este modo, cuando Arias Navarro se decidió a enviar al BOE el decreto-ley 7/1974 de 21 de diciembre, de Estatuto de Asociaciones Políticas, el político de Villalba continuaba deshojando la margarita. En julio de 1974 se constituyó de forma oficial el Gabinete de Orientación y Documentación SA (GODSA), impulsado por un

grupo de profesionales a los que unía la común preocupación por explorar diferentes alternativas ante el grave problema político que creaba el imparable declive del dictador. Fraga ya había establecido contactos previos con GODSA y además había conseguido introducir en ella a personajes de su órbita, por lo que no sorprende que de su seno salieran dos documentos —el «Llamamiento para una Reforma Democrática» y el «Libro Blanco para la Reforma Democrática»— que habrían de regir la creación de su *Reforma Democrática* (RD).⁴

No muy diferentes eran los objetivos y preocupaciones de la *Federación de Estudios Independientes* (FEDISA), donde desembarcarían los «Tácticos» y en la que Fraga coincidiría con figuras de muy diverso signo como el pontevedrés Pío Cabanillas Gallas —su muñidor, a decir de de la Cierva—,⁵ Areilza, Juan José Rosón, Leopoldo Calvo Sotelo, Luis González Seara o Francisco Fernández Ordóñez. Dicha sociedad tenía entre sus propósitos «promover estudios sociales, recoger datos y publicar textos, dar conferencias, que ayuden a un mejor conocimiento de la realidad política y social del país de cara a una evolución de sus estructuras políticas y constitucionales». Sus portavoces declaraban por entonces estar «con un pie en el régimen y otro en la oposición», reconociendo que su fundación era una respuesta a las limitaciones del asociacionismo impulsado desde el Gobierno.⁶

Es bien sabido que las estancias veraniegas de Franco en el Pazo de Meirás convertían a Galicia, por unos días, en centro de la alta política estatal. A la altura de agosto de 1975 la atención mediática, más que hacia el habitual Consejo de Ministros, estaba en uno de los salones del Hostal de los Reyes Católicos (Santiago de Compostela), donde se habían reunido los miembros del Consejo de Administración de FEDISA. José Solís, a la sazón ministro Secretario General del Movimiento, había dado a entender a los periodistas que Fraga, tras no aceptar el Gobierno sus condiciones el mes de enero anterior, se mostraba dispuesto a dar el «sí» a las

Asociaciones y a dejar de lado a la criticada vía de las sociedades mercantiles como alternativa a aquellas. Aun así, la sorpresa fue sólo relativa cuando el comunicado oficial certificaba el «no» rotundo de sus integrantes a dicha posibilidad, a la vez que insistían en

la conveniencia de que el cambio político debe tener más en cuenta la construcción del futuro que el juicio del pasado, con la finalidad primordial de organizar una sociedad plenamente democrática, con todas las características que esto lleva consigo, sin que para ello sea preciso revisar simultáneamente todas las instituciones existentes y procurando que este proceso se lleve a cabo con absolutas garantías de seguridad en todos los órdenes de la vida nacional.⁷

En cambio, otros conspicuos representantes del régimen decidirían transitar por la senda dibujada por los gobiernos de Arias. Así verían la luz la *Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales* (ANEPA) de Leopoldo Stampa y Enrique Thomas de Carranza —impulsor en febrero de 1977 de la *Unión Social Popular* tras su ruptura con el sector más «liberal»—, *Reforma Social Española* (RSE) de Manuel Cantarero del Castillo, *Unión Democrática Española* (UDE) de Federico Silva Muñoz y su posterior *Asociación Democrática Española* (ADE) —escisión de la anterior una vez que Alfonso Osorio decidió no integrarse en AP—, *Unión del Pueblo Español* (UDPE) de Adolfo Suárez y Cruz Martínez Esteruelas, *Acción Regional* (AR) de Laureano López Rodó y *Unión Nacional Española* (UNE) de Gonzalo Fernández de la Mora. Todas ellas fracasaron en su intento de consolidar en Galicia una sólida estructura territorial, a pesar de contar con algunos hombres vinculados al mundo empresarial y político y con conocidos profesionales liberales, especialmente en las dos provincias occidentales.

En el caso de UDE se dejó sentir especialmente el peso de la organización pontevedresa, impulsada por el exalcalde de Vigo y destacado empresario Antonio Ramilo Fernández-Areal, que fue quien captó para el partido —inicialmen-

te como un mero técnico— a un joven llamado a desempeñar altas responsabilidades en AP, ex seminarista por más señas y a quién la púrpura y la muceta atraían más que el traje talar luterano: Xosé Luís Barreiro Rivas. En abril de 1976 tuvo lugar la primera Asamblea Regional de *Unión Democrática Gallega* (UDG), donde se ratificó su integración en la UDE «manteniendo no obstante su autonomía y personalidad como partido político de carácter regional, siguiendo la ideología demócrata-cristiana» que inspiraba la organización matriz. También se eligió su primera gestora regional, integrada por Luis Fernández Castro, José Luis Fernández-España Español, José Fernández Vigo, Agustín Gándara Montero, Eduardo González de Lis, Luis Iglesias Álvarez, Alfonso Mariño Lago, Carlos Osorio Espiñedo, Miguel Osset González Rico, José María Pernas Martínez, Antonio Ramilo, Luis Ripoll García, Luis Rodríguez Carballido y César Torres Díaz.⁸ La mayoría de ellos seguirán a Silva Muñoz en su aventura de ADE.

La tradicionalista UNE se benefició de los orígenes ferrolanos de uno de sus pesos pesados, José María Velo de Antelo, y de las relaciones personales del líder en la provincia de Pontevedra, donde poseía un pazo heredado por su madre y cuya lista al Congreso encabezaría. De ella proceden hombres como Francisco Millán González Pardo y Mariano Rajoy, en Pontevedra, y Feliciano Barrera, editor de *El Correo Gallego*, en A Coruña, además del que sería su presidente regional, Bernardo Carrero Domínguez.

Todavía menos apoyos reunieron la UDPE, que contaba con algún gallego afincado en Madrid en su Junta Directiva, como es el caso Ernesto Fernández-Xesta, además de con el lucense Antonio Pedrosa Latas; la USP, con Nicolás Vidal Rodríguez en A Coruña, José María Penalba Cardona en Vigo y Modesto Rivera Franco en Lugo;⁹ RSE, que tenía como secretario general al abogado coruñés Manuel Estévez Mengotti; y AR, con apenas algunos soportes en Lugo. Para la mayoría, en aquellos momentos, con las Asociaciones se trataba más de cerrar el círculo de la

democracia orgánica franquista que de fijar una referencia a partir de la cual evolucionar por la senda del reformismo.

La crisis del segundo gobierno Arias y su exclusión de la terna de la que habría de salir el nuevo hombre llamado a conducir el proceso de transición a la democracia obligaron a Fraga a mudar de forma radical su estrategia política. Paralelamente, la salida de Suárez de la UDPE, la asociación política más numerosa e importante del momento, anticipaba el deseo del de Cebros de desligarse del pasado y a la vez de aproximarse al sector reformista que propugnaba la necesidad de implantar un sistema demoliberal homologable a los países de nuestro entorno, a los que dio entrada en su gobierno en julio de 1976. Entre quienes lo acompañaron estaba un ex colaborador de Fraga, el vigués José Manuel Otero Novas, miembro de la Asociación de Propagandistas, que ya había tenido contactos con la oposición moderada al régimen en Galicia. El político de Villalba, tras ser designado para la cartera de Gobernación, lo había incluido, junto al brigantino José Manuel Romay Beccaría —que había sido, con Pío Cabanillas y el lucense Antonio Carro, uno de sus principales contactos en el primer gobierno de Arias—, en un equipo al que encargó redactar un borrador de proyecto de reforma política que al final resultó demasiado avanzado para lo que Fraga creía factible en aquellos momentos. Con Suárez, desde la Subsecretaría Técnica de Presidencia, Otero tendría ocasión de darle forma más como metodología que como proyecto de reforma en sí.¹⁰

La maniobra significaba, ni más ni menos, el desplazamiento del político gallego de la posición central que hasta entonces había intentado ocupar como cabeza visible del sector más aperturista del régimen. La «traición de Suárez», que había boicoteado su proyecto desde la Secretaría General del Movimiento durante su etapa en Gobernación; el «robo» del centro, del que se consideraba «padre», y que ya había esbozado en su discurso al CNM de diciembre de 1969 y concretado en su obra «Legitimidad y

representación» (1973).¹¹ Todavía estuvo sobre la mesa por penúltima vez la carta del reformismo al comprobar que Areilza y Pío Cabanillas seguían su estela a la hora de negar su colaboración a Suárez,¹² pero el entendimiento se hizo imposible a finales de septiembre tras una primera reunión celebrada en tierras gallegas el mes anterior. El problema radicaba en que el «centrista» del franquismo no estaba ya en el «centro» del proceso de construcción de la democracia, como debieron hacerle ver los dos dirigentes cuando les propuso integrarse en un partido en el que ellos representarían el sector situado más a la izquierda.¹³ Cuando lo comprendió, no tuvo otra alternativa que acercarse en busca de aliados a quienes, desde el seno del Movimiento, hacía meses que venían esforzándose por avanzar hacia una alianza de las diferentes asociaciones surgidas al calor del tímido aperturismo gubernamental.¹⁴ Pero por mucho que quisiese presentar su giro como «un nuevo sacrificio» destinado a forjar una «derecha democrática, que pudiera consolidar las instituciones y servir de contrapeso al bandazo inevitable que la sociedad española iba a sufrir»,¹⁵ lo cierto es que fue el resultado de una triple confluencia de factores: la radical modificación del escenario de oportunidades políticas vigente tras el ascenso de Suárez, la contención de sus propios impulsos reformistas y su decisión de no quedar aislado a costa de no romper amarras con un entorno dominado por quienes propugnaban cambios poco más que cosméticos en el ámbito jurídico-institucional.

El primero de tales factores hacía tiempo que escapaba a su control, pues había sido excluido por el monarca tanto de la elaboración del guión como del reparto estelar de papeles. A ello no fue ajeno el elevado coste político que tuvo que pagar por su actuación al frente del Ministerio de Gobernación durante el segundo Gobierno Arias, empeñado en mantener a toda costa el orden público y controlar el *tempo* del reformismo frente al desafío esgrimido en las calles por la oposición democrática. En cuan-

to a su pretendido giro conservador, lo cierto es que casaba perfectamente con lo que eran sus convicciones íntimas mientras estuvo en el Gobierno, cuando, fuese por entroncar con una cosmovisión liberal doctrinaria de carácter anti-democrática y elitista como sostienen algunos¹⁶ o, más bien, por la valoración que hizo del marco de oportunidades políticas, no consideraba factible asumir las consecuencias que se extraerían del pleno reconocimiento de la soberanía popular y se inclinó más por «evolucionar» que por «reformar». Y respecto a la escasa proclividad aperturista de sus socios, es cierto que acabaría resultando perjudicial para sus expectativas teniendo en cuenta que dejaba a Suárez la iniciativa para definir el «centro» por oposición a lo que los rupturistas y Fraga pasaban a representar. Pero entonces, para quien parecía tener claro que la articulación de la derecha sólo podía realizarse desde el propio régimen, no parecía una apuesta descabellada dado que los nuevos equilibrios políticos no le dejaban otra opción que buscar un paraguas con el que concurrir a los futuros comicios. Algo en lo que, como la experiencia de Gil Robles, Ruiz-Giménez o Areilza demuestra, no erró, aunque sí lo hiciese en el hecho de que su apuesta era más un guiño hacia el franquismo político que hacia el sociológico, al que, con las cartas marcadas, mirarían otros con mejor fortuna.

De este modo, casi al mismo tiempo que se solicitaba la inscripción de RD en el Registro de Asociaciones Políticas, veía la luz *Alianza Popular* (AP), resultado de la federación de otras seis que le precedieran, de las que sólo UNE y ADE, como vimos, contaban con una muy relativa implantación en el solar galaico. Durante la presentación del *Partido Popular* de Areilza y Cabanillas a principios de diciembre de 1976, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona explicó con una clarificadora metáfora dónde dejaba a sus miembros la elección final del de Villalba: estamos «en las antípodas de algunos miembros de Alianza Popular [y] en el mismo hemisferio [que Fraga], pero a varios meridianos de distancia».¹⁷

Los respectivos líderes de la «federación» acreditaban un amplio currículum en el ejercicio de labores de gobierno —seis de ellos habían sido ministros con Franco—, pero no tenían una visión exactamente coincidente de cómo debía encararse el futuro político más allá de la necesidad de conjugar, en diferentes dosis, continuismo y reforma. Esto ayuda a entender —como por lo demás ocurre en el caso de UCD— la gran fluidez de las adscripciones partidarias durante el proceso de transición y los continuos vaivenes de dirigentes que actúan movidos, también en Galicia, más por posiciones estratégicas de acción y por la valoración concreta que realizan de la estructura de oportunidades políticas vigente en un momento dado que por unos planteamientos ideológicos sometidos a un permanente proceso de definición.¹⁸ Pero para lo que interesa a esta aportación, esa experiencia parecía resultar trascendental en aquellos momentos a la hora de crear una red territorial aprovechando las conexiones entre élites políticas y estructura administrativa vigente.

Galicia, el oasis popular

Quienes se han aventurado en el estudio de AP ya han insistido sobradamente en las dificultades que planteaba integrar la existencia de varias organizaciones con líderes y órganos de dirección diferentes conviviendo sobre un mismo ámbito territorial, en la lucha interna por consolidar posiciones de poder y liderazgo como consecuencia de la pluralidad de líderes y en el carácter netamente de «cuadros» o de «notables» que presentaba en sus orígenes la federación. Algo que casaba perfectamente con la desmovilización política fomentada por la dictadura y que explica las reticencias de la población a integrarse en la vida orgánica de los partidos políticos, sobre todo en el ámbito sociológico del que debía nutrirse la derecha gallega. En consecuencia, el liderazgo personal acaba imponiéndose sobre cualquier otra consideración derivada de las exigencias de canalizar

las demandas de grupos o colectivos concretos, a la vez que se favorece su concepción como un círculo de «amigos políticos» destinado a arrojar a la cúpula dirigente.

Y también se ha apuntado con acierto que si bien los impulsos que determinan su expansión por los diferentes territorios del Estado proceden de Madrid —en especial en los primeros momentos—, la desigual impronta geográfica de las formaciones que la integran faculta para hablar de un modelo organizativo de «desarrollo mixto», que en nuestro caso permite destacar la sustantividad de las relaciones Madrid-Galicia: por penetración (desde el centro a la periferia) y por difusión (desde la periferia al centro).¹⁹ Ambos elementos definen una especie de inicial *federalismo asimétrico* que caracteriza las relaciones primigenias entre dichas fuerzas en el seno de la coalición electoral: en su primer Congreso, celebrado los días 5 y 6 de marzo de 1977, las siete entidades originarias quedan reducidas a tres [ADE, UNE y el Partido Unido de Alianza Popular (PUAP), surgido de la fusión de las otras cinco]. Esto acabará por fortalecer todavía más la posición interna de Fraga, al que algunos de sus compañeros de viaje quisieron adjudicar en un principio la posición de una especie de «primus inter pares», sobre todo teniendo en cuenta que era la UDPE la que tenía un mayor peso organizativo por su relación con la OSE y el Movimiento, pero que enseguida acabarían por rendirse a su liderazgo y capacidad de trabajo.²⁰ Si esto último es aplicable al conjunto del Estado reza con más fuerza todavía para Galicia, donde la casi nula presencia de la UDPE y los contactos de Fraga beneficiaban claramente a RD al margen de las inevitables discrepancias entre los respectivos líderes sobre la fortaleza real de cada una de ellas.²¹ Su primer coordinador regional y vocal en el Comité Ejecutivo Nacional fue el lucense José Manuel González Páramo,²² que residía en Madrid y estaba bastante más alejado de la realidad política y social gallega que el propio Fraga. Este último alimentara no pocas fidelidades personales en su

tierra natal, parte de las cuales le acompañarán durante su larga travesía del desierto. También había sabido utilizar su puesto en Gobernación para colocar a un buen número de gobernadores civiles afines, entre ellos los de Ourense y Pontevedra, nombrados a menos de un mes de cesar en el cargo.²³ Y, asimismo, había captado a algunos prohombres vinculados a las jefaturas provinciales del Movimiento y a contados alcaldes y concejales en ejercicio, aunque desde luego en una proporción muy inferior a la de UCD como tendremos ocasión de relatar.

Nombres como María Victoria Fernández-España –perteneciente a la familia propietaria del diario regional de mayor influencia, *La Voz de Galicia*– y su cuñado Francisco Puy Muñoz –catedrático de Filosofía del Derecho en la USC– en A Coruña; el exministro Antonio Carro Martínez, el catedrático de la Escuela de Empresariales Aniceto Codesal Lozano –primo de Fraga– y el inspector de Enseñanza Primaria Francisco Cacharro Pardo en Lugo; el empresario Luis Ortiz Álvarez, el funcionario de Hacienda Jaime Tejada Lorenzo, el exalcalde y consejero provincial del Movimiento Miguel Riestra París y el procurador en Cortes Javier Perea Rodríguez en Ourense; y el industrial y exteniente de alcalde en Vigo Castor Alonso Bar en Pontevedra van a ser los primeros puntales del grupo inicial de fieles a Fraga que inician la articulación territorial de RD-AP con el generoso apoyo económico de la Banca y de la denominada «derecha de intereses», que, no obstante, no renuncia –ni renunciará– a diversificar sus apuestas políticas. Con todo, la debilidad orgánica se demuestra en el hecho de que dos de los citados, Carro y Riestra, diputados electos por Lugo y Ourense en 1977, pertenecían a lo que se dio en llamar el «grupo cero», un conjunto de personalidades que contaban con una serie de bases caciquiles que les permitían incluso imponerse por encima de las directrices del partido cuando estas resultaban contrarias a sus intereses, y que habían elegido afiliarse directamente a AP en lugar de hacerlo a alguna de las formaciones que la integraban.²⁴

Y como ocurrirá en el resto del Estado, la fidelidad al líder, la relación directa con el centro y la elección de la provincia como eje de expansión del partido irán inicialmente en detrimento de la estructura regional. De hecho en las provincias más occidentales fueron frecuentes los enfrentamientos entre las direcciones locales de las principales urbes, que en caso de las disputas Vigo-Pontevedra llevaron incluso a la división de la provincia en dos ejes para facilitar su implantación, lo que no evitó la presentación de candidaturas enfrentadas por intereses localistas en los congresos provinciales.²⁵ Esto determinó que el futuro partido fuese sometido a un doble proceso de lucha por el liderazgo interno: primero entre los líderes de las diferentes formaciones federadas por imponerse en la pugna organizativa y en los puestos de privilegio en las listas electorales; y más tarde, cuando se avance hacia la constitución de la organización regional, por acceder a los puestos clave de esta²⁶ o, en su caso, para mantener el control sobre sus respectivas baronías.

La elaboración de las listas, como por lo demás sucede en todas las formaciones, representa el instante culminante de esta lucha y de ella hubo ya abundantes ejemplos con ocasión de los comicios del 15 de junio de 1977. En Lugo, por ejemplo, se pusieron de manifiesto los diferentes intereses de la organización provincial y la dirección central: una vez que Fraga declinó el ofrecimiento de encabezar la lista por esta circunscripción, aquella se inclinaba porque lo hiciese el exprocurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento Antonio Pedrosa Latas, pero al final se impuso la candidatura del exministro Antonio Carro, que no resultaba precisamente del agrado de las bases.²⁷ Por su parte, la organización provincial de Pontevedra hubo de hacer sitio a nada menos que tres «cuneros», candidatos que ni por nacimiento ni por residencia tenían relación con la circunscripción y que fueron impuestos por el propio Fraga.²⁸

No es nuestra intención profundizar en la dinámica electoral gallega, tarea que ya hemos

abordado en otras ocasiones y sobre la que ya existen títulos suficientemente clarificadores.²⁹ Para lo que aquí interesa, basta recordar que UCD fue la formación más votada con un 53,76% de los votos y un total de 20 escaños, seguida de AP con el 13,13% de los votos y 4 escaños; el PSOE, con el 15,52% de los sufragios, se situó como segunda fuerza en número de votos, pero sólo lograba traducirlos en 3 escaños, uno menos que los populares. Los más de cuarenta puntos porcentuales que la coalición centrista sacó a la conservadora –poco más de veintiséis en el conjunto del Estado– no pueden ser interpretados en el sentido de una menor inclinación hacia el espectro político derechista en Galicia, teniendo en cuenta que en ella AP supera en casi cinco puntos sus resultados globales. Más bien son expresión de la debilidad política de las fuerzas situadas a la izquierda de UCD y del éxito cosechado por los centristas a la hora de captar a las élites neocensitarias tardofranquistas y a su habilidad en el manejo de los recursos controlados por el Movimiento-Organización. Algo que, en el fondo, no dejaba de resultar paradójico: tanto los votantes de AP como el conjunto del electorado percibían al partido como mucho más «franquista» que UCD, cuando desde la perspectiva de los mecanismos de captación de apoyo social y electoral este último resultaba mucho más arcaico y a la vez daba refugio a un mayor porcentaje de la clase política procedente del régimen anterior.³⁰ Fueron, sin duda, quienes mejor tomaron nota de la recomendación que Henry Kissinger hiciera al conde de Motrico en junio de 1976: no ir a las elecciones hasta que el Gobierno tuviese un partido propio que le diese la seguridad de ganarlas.³¹

El voto afirmativo de Fraga al texto constitucional supuso, como es bien conocido, el reforzamiento de su liderazgo interno y uno de los puntos culminantes en el tan discutido proceso «civilizador» de la derecha más reticente al proceso democratizador. Que ello obedeciese a un meditado cálculo político para desembarazarse de Silva Muñoz y Fernández de la Mora,

a una convicción personal o a ambas no es algo trascendente para esta aportación. Sí lo es que en Galicia la disolución de ADE trajo consigo la incorporación al PUAP de una parte de sus militantes mientras otros desaparecían de la escena política. Por su parte, la UNE, cuyo peso era especialmente significativo en A Coruña, ya había sufrido una primera fractura cuando la presentación que Fraga hizo de Carrillo en el Club Siglo XXI provocó la salida del partido del vicepresidente ejecutivo nacional y n.º 2 al Congreso por la provincia, J. M.ª Velo de Antelo, conocido por sus ideas tradicionalistas y cuyos seguidores ya habían provocado no pocos debates internos por el, a su juicio, excesivo reformismo de la coalición. Tras su ruptura con la federación, arrastraría una vida lánguida hasta su desaparición a principios de los años ochenta.

A continuación Fraga, en un intento de disputarle el centro-derecha a UCD y de no empeorar sus problemas financieros desoyendo recomendaciones en tal sentido, pactó con Areilza (Acción Ciudadana Liberal, ACL), Osorio (Partido Demócrata Progresista, PDPr) y otras formaciones aún menores la presentación de candidaturas conjuntas, aunque en Galicia las listas fueron encabezadas por hombres de AP. La operación en el conjunto del Estado significó para *Coalición Democrática* (CD), que así se llamaba el ensayo, la pérdida de 2,32 votos porcentuales, aunque en Galicia mejoró en casi un 6% el porcentaje de sufragios y redujo su diferencial respecto a UCD hasta los treinta y cuatro puntos, aunque mantuvo el número y la distribución provincial de escaños. Con ello se consolidaba una tendencia que sólo comenzaría a invertirse a partir de las municipales de 1983: el incremento del diferencial de voto en Galicia respecto a la media del Estado, cualquiera que fuese la fórmula adoptada por el partido conservador.

Los desastrosos resultados del 1 de marzo de 1979 condujeron a la momentánea dimisión de Fraga y a la de parte de la Junta Directiva Nacional, seguida de la desbandada de muchos de los hombres de ACL y PDPr. En esas condicio-

nes, ni siquiera en Galicia fue posible desarrollar una estrategia efectiva con vistas a las elecciones municipales del 3 de abril que fuese más allá de la captación de algunas élites locales, que por las más diversas razones no habían encontrado acomodo en UCD y no deseaban concurrir como independientes. La constatación empírica de esta afirmación por G. Márquez, al que seguimos en este punto, ofrece interesantes matices.³² El primero es que en Galicia la continuidad bruta de la élite política neocensitaria representó el 5,7% de los candidatos que compitieron en 1979, de los cuales el 49,3% encontró acomodo en las listas de UCD, el 27,3% en las de CD y el 14,2% en las Agrupaciones de Electores Independientes (AEI). Sin embargo, los municipios en los que figuraba al menos un mandato de 1973 que continuaba en 1979 representaban el 78,2% del total, siendo Coruña la provincia en la que se registró un índice de continuidad de candidatos menor y Ourense la mayor.

Ahora bien, las élites políticas neocensitarias representaban nada menos que el 22% de los concejales de CD, el 19,7% de UCD y el 15,1% de las AEI. Esta situación se invertía en el caso de Ourense, donde los mandatos de origen neocensitario de UCD superaban en más de tres puntos porcentuales a los de CD, mientras que la formación liderada por Fraga superaba la media gallega de mandatos en Lugo y Pontevedra, provincias en las que las AEI también tenían una mayor presencia neocensitaria. Pero lo que resulta mucho más significativo es que si bien el porcentaje de alcaldes electos en 1979 que habían sido alcaldes, concejales o candidatos en el período neocensitario era muy similar entre todas estas plataformas (55,2% en el caso de UCD, 55,9% en el de CD y 53,2% en el de las AEI), las cifras «en bruto» ofrecidas por Márquez Cruz ponen en evidencia el desigual éxito en la captación de dichas élites: UCD atrajo a 96 alcaldes, concejales o candidatos del período neocensitario que repitieron mandato en 1979, CD a sólo 19 y las AEI a 33. Aquí encontramos, a nuestro juicio, uno de los factores determinantes, junto con el tirón

personal de Fraga, para interpretar el, en términos comparativos, mayor apoyo electoral a AP y a las formaciones coaligadas en Galicia que en conjunto del Estado y, a la vez, el también mayor peso de la coalición centrista y su acreditada capacidad de supervivencia. Asimismo, también contribuye a explicar los mejores resultados obtenidos por AP en solitario o en coalición en los ámbitos urbanos —y, en general, en la «Galicia menos pobre»— frente a la media gallega, justo al contrario de lo que ocurre con UCD.

Las dos debacles electorales de 1979, es verdad que atenuadas en el «oasis» galaico, acabarían teniendo efectos positivos para los conservadores. Al retiro estival de Fraga en Perbes (Miño-A Coruña) acudieron a buscarlo un grupo de jóvenes que no querían ni oír hablar del acercamiento a UCD que propugnaban algunos miembros de la Federación de AP, los cuales llegaron a poner al partido en almoneda sin hallar excesivo eco en los centristas. Los encabezaba el que se convertiría en secretario general tras el III Congreso (14-16 de diciembre), el de la *primera refundación*: Jorge Vestrynge, que fue quien consiguió mantener viva la estructura territorial hasta el regreso del patrón, con quien compartía la tesis de que el partido de Suárez acabaría estallando en pedazos. Con él se produciría un cierto relevo en el aparato generacional y la marginación de los elementos más extremistas extensivos a Galicia, donde comenzó a descollar la figura del ya citado X. L. Barreiro. Por entonces Luis Ortiz, que ejercía de presidente regional, accedió también a una vicepresidencia nacional con la que se premiaba el peso de los escaños cosechados en la tierra del patriarca. González Páramo también se mantenía entre los vocales nacionales.

El tímido reforzamiento de la organización gallega y el horizonte del integracionismo

Con todo, los elementos centrales que van a posibilitar un cambio radical en la organización y los planteamientos políticos e ideológicos del

partido van a ser el proceso estatutario y los resultados de los primeros comicios autonómicos. Respecto al primero, y a pesar de las vacilaciones y titubeos iniciales, el Congreso Regional del 30 de noviembre de 1980 apostó inequívocamente por el nuevo marco institucional y por el reforzamiento de la organización regional, una cuestión que no había salido precisamente bien parada de los congresos provinciales celebrados desde mediados del mes anterior.³³ Esta orientación representaba la culminación de las tesis que había defendido X. L. Barreiro en diversos informes de carácter político elaborados tras la derrota de las legislativas de 1977 en los que había apostado por el rejuvenecimiento de AP y el cambio en sus planteamientos iniciales respecto a la Constitución, la autonomía y toda una serie de problemas educativos y sociales.³⁴ En el fondo, aunque el de Forcarei no lo había enfatizado de forma tan explícita, se estaba planteando la necesidad de que AP dejase de ser una plataforma electoral al servicio de la carrera política de sus prohombres y se convirtiese en un partido sólidamente implantado en la sociedad gallega como único medio de superar los vicios históricos que habían lastrado a las formaciones de derechas.

Y en cuanto a los segundos, la convocatoria electoral y la necesidad de ofrecer un programa en clave «regional» y no una mera adición de propuestas de ámbito provincial exigían potenciar la organización gallega frente a las reticencias exteriorizadas por diversas provinciales.³⁵ Con todo, las limitaciones de la nueva APdeG se pusieron de manifiesto a la hora de elegir candidato para la presidencia de la Xunta con vistas a las elecciones del 20 de octubre de 1981, una vez que, para disgusto de la patronal, no cuajó la propuesta de una candidatura conjunta con UCD que hubiera catapultado a Otero Novas o a Meilán Gil a la presidencia de la Xunta. La designación de Xerardo Fernández Albor, miembro del colectivo galleguista *Realidade Galega*, que había tenido un destacado papel a la hora de movilizar a la opinión pública ante los inten-

tos del aparato de la UCD de rebajar las expectativas creadas por el anteproyecto de Estatuto, resultó, sin duda, un importante golpe de efecto. Pero también fue expresión de la ausencia de otro referente que no fuera el líder nacional y de los inconvenientes creados por la falta de un proyecto ideológico y organizativo claro y compartido por las elites locales y provinciales.

La inexperiencia del candidato, promocionado por la familia Fernández Armesto, y su desconocimiento del aparato aliancista pudieron ser suplidos gracias al concurso de hombres como Javier Carabias del Arco, J. M. Romay y el propio X. L. Barreiro. Este último lograría escalar hasta n.º 1 de la candidatura por Pontevedra con el apoyo del presidente regional, Luis Ortiz, no sin vencer las reticencias que las élites viguesas del partido dispensaban a su talante progresista y galleguista. No menos decisiva resultó la acertada campaña electoral, para la que los dineros volvieron a fluir y durante la cual los conservadores focalizaron su campaña en las figuras de Albor y Fraga —que, fiel a su costumbre, recorrió miles de kilómetros llevando su mensaje a todas las cabeceras de comarca—, transmitiendo la imagen de un partido «gallego», dirigido por un hombre de Galicia y sin ningún tipo de complejos a la hora de asumir la lengua y el patrimonio cultural autóctono. Eso dejó en un segundo plano la propia composición socio-profesional de los integrantes de las candidaturas, con todo muy indicativa del espectro sociológico al que miraba cada formación: en lo que a CD se refiere, sus listas estaban dominadas por empresarios, autónomos y profesionales liberales, en rigor no muy diferentes a las de UCD, a salvo del mayor peso de los primeros en lo que a los conservadores se refiere.³⁶ Realmente, ni los más ingenuos podían pensar que los llamamientos en favor de participación electoral, «sin prestar apoyo a ningún partido concreto», que hizo la Confederación Gallega de Empresarios guardaban algún parecido con los deseos de sus socios, que a lo largo de la campaña, al igual que la USO, se fueron decantando explícitamente

por «las opciones políticas de centro y derecha moderadas».³⁷

AP obtuvo 26 de los 71 escaños en juego, seguida por UCD con 24, el PSOE con 16, 3 los nacionalistas del BNPG-PSG y 1 *Esquerda Galega* y el Partido Comunista de Galicia. Su victoria se había cimentado en el control de las principales urbes y villas, mientras que UCD sólo podía mantener el tipo gracias a su clara victoria en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Tras la negativa de la ejecutiva gallega de UCD a dialogar con los socialistas y ante la inviabilidad de un gobierno de izquierdas, la única posibilidad de lograr un gobierno estable pasaba por el entendimiento entre centristas y aliancistas. La «mayoría natural» soñada por Fraga parecía por fin estar a punto de materializarse, ya fuese bajo la fórmula de un ejecutivo de coalición ya mediante un pacto de legislatura que dejase a AP la responsabilidad de gobernar en solitario. Los sectores suarista y socialdemócrata de UCD temían que si esto se concretaba el partido escoraría hacia la derecha de modo irreversible, aunque la desafección de Fernández Ordóñez parecía despejar el camino para el acuerdo. Sin embargo, tras la remodelación en la jefatura del partido y la exclusión de los demócrata-cristianos defensores del pacto con AP en el nuevo gobierno, UCD volvió a marcar distancias con los aliancistas. En realidad, una parte destacada de la organización gallega tampoco era partidaria de llegar a ningún tipo de acuerdo: la antipatía que el político de Villalba despertaba en algunos dirigentes provinciales y la amenaza de convertirse a medio plazo en un partido bisagra obligaron a Fernández Albor a formar un gobierno monocolor sin ningún tipo de acuerdo previo que le pusiese a salvo de sobresaltos. A pesar de ello, en la sesión de investidura de los días 7 y 8 de enero de 1982, obtuvo 52 votos gracias al apoyo de los centristas y de dos independientes.

La necesidad de encarar el proceso de construcción autonómica supuso un paso más en la creación de unas estructuras organizativas y cultural-identitarias muy alejadas del tradicional

discurso aliancista, como hemos visto ya muy modulado durante la campaña electoral. El establecimiento de las bases institucionales y legales de la Administración autonómica y la gestión del complicado proceso de transferencias se realizó en oposición a un poder central controlado primero por UCD y más tarde por el PSOE y en un contexto en el que la organización gallega de AP se consolida como referente a seguir desde Madrid. Si a esto añadimos el capital político que supone la experiencia de gobernar una Comunidad Autónoma definida como nacionalidad histórica, se entenderá la limitada emancipación de los órganos directivos de Madrid que se produce en esta etapa: además de un líder, comienza a gestarse un partido. Ello, no obstante, compatible con la importante autonomía que seguían mostrando las organizaciones provinciales y con el papel que sigue desempeñando un Fraga omnipresente en cada acto de trascendencia para la organización. Esta mayor libertad fue acompañada de un cierto crecimiento y una relativa penetración en el seno de la sociedad civil no ajenos a su control de la Administración y a la necesidad de contar cada vez con un mayor número de élites técnicas. Y si bien esto último multiplicará su potencial de atracción respecto a cargos y militantes de UCD, ya en franco proceso de desintegración, no es menos cierto que irá en detrimento de una institucionalización organizativa fuerte, como se tendrá ocasión de comprobar en el IV Congreso Regional de octubre de 1983, cuando los principales cargos públicos accedan, asimismo, a la dirección organizativa del partido.³⁸ Conviene, sin embargo, no adelantar acontecimientos.

Ni siquiera la convocatoria electoral de octubre de 1982 sirvió para aplacar a las huestes centristas, que se hundieron de forma estrepitosa en el conjunto del Estado. En Galicia, con todo, consiguieron retener al menos cinco de los veintisiete diputados en juego y más de 230.000 votos frente a los trece escaños y más de 488.000 sufragios de la coalición formada por AP y el *Partido Demócrata Popular* (PDP).³⁹ Esta

última se impuso en tres de las cuatro provincias, quedando a poco más de 16.000 sufragios de los socialistas en A Coruña, la única donde venció el PSdeG-PSOE. Obtuvo en total 13 de los 27 escaños en juego (4 en cada una de las provincias occidentales, 3 en Lugo y 2 en Ourense) frente a sólo 5 de UCD. El peso de AP en Galicia dentro de la coalición se puso de manifiesto en el hecho de que fueron sus hombres los que coparon todos los puestos de salida. Incluso, a pesar de que Fraga había pactado con Óscar Alzaga que el cabeza de cartel por Pontevedra sería Otero Novas, al final se impuso Fernando Garrido Valenzuela como producto de un «cambiazó» en las candidaturas auspiciado, entre otros, por Barreiro y Ortiz a espaldas del «patrón».⁴⁰

La debacle *ucedea* y la perspectiva de los comicios locales que habrían de celebrarse en la primavera de 1983 inquietaban en sobremanera a los cuadros políticos intermedios y municipales pertenecientes al partido que había liderado la transición y que ahora estallaba en una crisis irreversible que le llevaría a anunciar su disolución en febrero de ese año. Como consecuencia, el grupo parlamentario de UCD en Compostela estalló en múltiples pedazos: el 3 de marzo, una docena de diputados de variada procedencia territorial sin más capital político que su escaño se conjuraron para dar estabilidad al ejecutivo que presidía Fernández Albor; además, tres de ellos (V. M. Vázquez Portomeñe, J. Suárez Vence Santiso y J. C. Mella Villar) se incorporaron al mismo como consejeros.

A pesar de las buenas perspectivas que se le abrían, AP se mostró incapaz de atraer al grueso de los antiguos centristas. Las elecciones locales del 8 de mayo de 1983 sirvieron para que tres alcaldes que se habían presentado por las listas de UCD en Lugo cuatro años antes y siete en Pontevedra repitiesen mandato encuadrados ahora en la coalición formada por AP-PDP-UL. En A Coruña, Enrique Marfany Oanes, heredero político de José Luis Meilán Gil y presidente de la Diputación coruñesa desde 1979, pactó con

María Victoria Fernández-España la incorporación de los excentristas dentro de las listas conservadoras, la mayoría como independientes, a cambio de conservar su condición de cabeza de cartel para el ente provincial; trece de ellos consiguieron retener la alcaldía bajo las nuevas siglas.

Bien diferente fue el caso de Ourense, donde Eulogio Gómez Franqueira, fracasadas sus conversaciones con los aliancistas por el espinoso tema del control de la Diputación y la imposibilidad de superar los personalismos para la elaboración de candidaturas conjuntas en la municipales, aprovechó los puentes tendidos por el *Partido Galeguista* (PG) y por M. Roca y su *Operación Reformista* para dar origen a una nueva criatura: *Coalición Galega* (CG), presentada en sociedad el 18 de marzo justo a tiempo para incorporar a sus filas a la totalidad de los alcaldes que habían vestido la camiseta centrista en 1979, frustrando así las expectativas de los conservadores.⁴¹ No obstante, una valoración ecuánime del nivel de implantación de la coalición conservadora debería tener en cuenta que a finales de 1982 AP apenas cubría el 42% de los municipios del Estado, mientras que en Galicia lograría presentar candidaturas en la práctica totalidad de sus 312 ayuntamientos.

Los resultados de las municipales a nivel provincial constituyeron un fiel reflejo de los movimientos que siguieron a la disolución de la extinta UCD. En A Coruña la maniobra de Marfany permitió que la Diputación pasase a manos de los conservadores y estos pudiesen resistir el empuje de un PSOE claramente en ascenso, que se situó a poco más de tres puntos de diferencia; el 15,17% de los sufragios que fueron parar a independientes era el único obstáculo que parecía interponerse entre la coalición AP-PDP-UL y su ansiado control de todo el espectro político del centro-derecha. En la provincia de Pontevedra la muy inferior implantación del PSOE proporcionaba a los aliancistas un cómodo colchón de casi once puntos sobre este, pero el peso conjunto de independientes y *coagas* re-

presentaba nada menos que el 22% de los votos. En Lugo fue donde los conservadores hicieron sentir con más claridad su peso, superando el 39% de los sufragios; sin embargo, la suma de CG y los independientes se elevaba hasta el 30%. En Ourense, la Coalición Popular (CP) quedó a seis puntos de distancia del centro-galleguista que decía representar CG, que consiguió captar 64.642 sufragios de los 70.963 que había obtenido UCD cuatro años antes; en cambio, AP-PDP-UL sólo consiguió mejorar en 22.403 votos sus anteriores resultados.

Las lecturas que realizaron las diferentes fuerzas políticas de este complicado mapa electoral marcarían el devenir del centro derecha gallego en tres ámbitos o niveles clave. En el parlamentario AP consiguió reforzar la estabilidad del ejecutivo a través de la doble vía de incorporar a sus filas a diputados procedentes de la extinta UCD y de aprovecharse de la debilidad política en que habían quedado aquellos que, carentes de unas siglas que les proporcionasen cobertura, hubieron de agruparse hasta en tres grupos parlamentarios diferentes de nueva creación (el Grupo Parlamentario Independiente, el Grupo Centrista de Galicia y Coalición Galega). Pero ese reforzamiento seguía denotando la incapacidad de AP para fagocitar a los antiguos centristas incluso a nivel de las élites parlamentarias: a finales de la legislatura, en el otoño de 1985, CG había incorporado a diez diputados elegidos en las listas de la UCD y parte de los centristas y los independientes se resistían a aceptar los repetidos ofrecimientos de los conservadores. Y eso que la remodelación del gobierno que siguió a los comicios municipales había premiado a los centristas con cuatro de las nueve consejerías, lo que no agradó precisamente a los «históricos» de AP.

En el ámbito provincial, los equilibrios políticos en las cuatro Diputaciones tendrían una incidencia capital no sólo en el camino que seguiría el centro-derecha sino en la propia estructuración interna de AP. A pesar de que con el nuevo marco autonómico los entes provin-

ciales parecían condenados a perder gran parte de su protagonismo político, lo cierto es que mantuvieron su capacidad para distribuir incentivos selectivos en los diversos niveles de la Administración y para mantener el control de los pequeños municipios, muy necesitados de los servicios que aquellos podían proporcionar con grandes dosis de discrecionalidad. Por ello, su gobierno seguía resultando esencial para extender territorialmente la estructura del partido, asegurar la lealtad de las élites municipales y con ello garantizar la adecuada traducción en votos de los recursos distribuidos de forma desigual.

En 1983 las cuatro diputaciones gallegas, antes en manos de UCD, cambiaron de color político, aunque sólo en dos casos de titular. En Lugo, Francisco Cacharro Pardo consiguió retener para la CP 13 de los 15 asientos obtenidos cuatro años antes por UCD y, sobre todo, situó a AP en una posición de dominio casi absoluto a nivel de los equilibrios internos de la coalición. Su mayoría le permitirá, además, ir erosionado de forma lenta, pero irreversible, las bases de poder local de numerosos alcaldes que habían concurrido a los comicios bajo las siglas de la coalición *Partido Galeguista-Converxencia de Independientes de Galicia* (PG-CIGA, la «marca» de CG en la provincia antes de constituirse oficialmente como partido). También en Pontevedra se produjo el relevo en la sede provincial con notoria solvencia, al mantener CP 14 de los 18 escaños de los centristas. Incluso la posición relativa de la coalición conservadora era mejor que en Lugo teniendo en cuenta que la CIGA sólo tenía dos diputados, a los que habría que añadir un independiente que representaba a la lista del ex alcalde centrista de A Estrada. Sin embargo, a diferencia de Lugo, Mariano Rajoy, su nuevo titular, no aprovechará la institución para crear una sólida estructura de poder personal vinculada al cargo, que abandona ya en diciembre de 1986 al ser llamado a Santiago como vicepresidente del gobierno gallego.

En A Coruña, CP conservó 17 de los 20 diputados de UCD, garantizando así la renovación

de E. Marfany según hemos tenido ocasión de apuntar. Pero, a diferencia de Lugo, el pivote de la alianza no era AP sino el PDP, lo cual, teniendo en cuenta los vaivenes de este partido y la propia trayectoria del líder coruñés, que lo presidía en Galicia, dibujaba un panorama mucho menos alentador que en aquella. También en Ourense la presidencia del Palacio Provincial continuó en manos del mismo inquilino: Victorino Núñez Rodríguez, cabeza de cartel de UCD en 1979 y de la coalición *Partido Galeguista-Centristas de Ourense* (denominación oficial de lo que sería CG en la provincia) en 1983. Y con ello la capacidad para seguir distribuyendo entre los fieles esos incentivos selectivos a los que aludíamos en una provincia en la que la definitiva recomposición del centro derecha aún tardaría casi una década en producirse.

El tercero de los niveles, estrechamente relacionado con el anterior, tuvo que ver con los problemas de *digestión* que para los conservadores supuso el desembarco de elites locales procedentes de UCD o de las siglas de conveniencia que la sustituyeran. Si cabe esto vino a poner todavía más en entredicho la capacidad de los conservadores para reforzar la unidad de su cúpula dirigente, a lo que no fueron ajenas las tensiones provocadas en los niveles inferiores de la organización por la necesidad de hacer sitio a unos recién llegados con los que se había disputado agriamente en numerosos municipios. Estos enfrentamientos, el peso de las baronías provinciales y la inveterada tendencia de Fraga a intervenir en la resolución de todo tipo de conflictos internos debilitaron el desarrollo de la organización regional, como también lo hizo la menor atención que Fernández Albor prestaba a las tareas orgánicas frente a su papel institucional como presidente de la Xunta.

En Ourense, donde las etiquetas ideológicas y partidarias raras veces permiten describir con precisión los alineamientos políticos y la generación de apoyo electoral, dichos problemas requirieron de sucesivas cirugías que mantuvieron al enfermo en permanente estado de convul-

sión. Tantas que en los trece años que siguieron a la fundación de AP hubo nada menos que nueve presidentes provinciales. Buena parte de ellos fueron fagocitados como consecuencia de las sucesivas derrotas ante los centristas y sus herederos o debido directamente a las disputas que a la hora de la confección de las listas se producían cada vez que la cúpula del partido forzaba una coalición electoral con tan incómodos aliados/rivales, de los que, sin embargo, no era posible prescindir teniendo en cuenta que en varias ocasiones tuvieron en sus manos la llave de la política gallega.⁴²

En la provincia de A Coruña cabe hablar si acaso de un cierto empacho que apenas requirió el uso del cauterio. La incorporación de los ex centristas se produjo de forma gradual, con algunos sobresaltos agravados por las desavenencias entre las tres «baronías» urbanas (A Coruña, Santiago y Ferrol) y las huellas que dejó la querrela acerca de la capitalidad autonómica. Tampoco el antagonismo entre dos históricos de AP, José Manuel Romay Beccaría y María Victoria Fernández-España, que se saldaría con la defenestración de la primera en el congreso provincial de enero de 1986, contribuyó precisamente a calmar las aguas.

En Pontevedra se reprodujeron, asimismo, las históricas disputas entre las organizaciones de Vigo y la de la capital provincial, y tampoco resultó sencillo conciliar los intereses de los municipios rurales del interior con los de las villas costeras. La falta de un liderazgo claro no fue obstáculo para que la digestión de los «ucedeos» se realizase con relativa calma una vez que las distintas siglas que pretendieron aprovechar su legado (independientes, CG, CDS) acabaron por extinguirse casi de forma natural. Aun así Fraga se vio obligado a imponer en más de una ocasión su particular criterio, como ocurrió en fecha tan avanzada como enero de 1986, cuando forzó al entonces presidente provincial del partido y de la Diputación, Mariano Rajoy, a no postularse para la reelección a la vez que imponía al vicepresidente de la Xunta, X. L. Barrei-

ro, una candidatura única que incluía a significados centristas como José Rivas Fontán (alcalde de Pontevedra, primero bajo las siglas de UCD y por entonces como independiente en las listas de AP), José Cuiña Crespo (alcalde de Lalín) y el ex ministro Jesús Sancho Rof.

En cambio, el «oasis» lucense constituyó una excepción durante el largo proceso recomposición de la derecha en Galicia. La clave parece haber estado en la menor implantación política de UCD y en la mayor dispersión de su herencia en comparación, por ejemplo, con la provincia de Ourense. No se puede olvidar que en 1977 y 1979, cuando los porcentajes electorales de las coaliciones nucleadas alrededor de AP cosechaban porcentajes ridículos de voto, en Lugo se movían en torno al 20%. Y tampoco que en el primer Senado elegido democráticamente sólo hubo un representante del partido fundado por Fraga —el segundo pertenecía a un partido coaligado—: Francisco Cacharro Pardo, un hombre de nulas veleidades centristas que estaría al frente de la Diputación y manejaría la política provincial nada menos que veinticuatro años.

Epílogo: la «mayoría natural»

La trayectoria de la derecha que emerge en Galicia de la descomposición del régimen franquista presenta algunas singularidades respecto al conjunto del Estado. Como en este, en los momentos aurorales de la transición a la democracia múltiples fuerzas que se movían en los confusos y no siempre bien definidos linderos del aperturismo/reformismo pretendieron servir de paraguas para numerosos líderes carentes de apoyo popular. Las visiones contradictorias sobre los límites del proceso democratizador fueron dejando en el camino a quienes, por las más diversas razones, no fueron capaces de culminar la profunda operación de reciclaje que los nuevos tiempos exigían. Y también, al igual que en el resto de España, la fuerte personalidad de Manuel Fraga condicionó de modo decisivo su evolución futura.

Lo peculiar del universo galaico reside, en primer lugar, en que su estructura socioeconómica y los movimientos políticos en el seno de la élite dominante en los instantes finales del tardofranquismo situaban al centro-derecha en una posición todavía más privilegiada que en el conjunto del Estado debido al escaso poder de atracción de la izquierda. Esto explica que la procedencia de los notables locales captados por las dos grandes coaliciones que se disputaban la hegemonía en este espectro sea sustancialmente la misma y, en consecuencia, la adscripción ideológica sea mucho menos determinante que las relaciones personales y el oportunismo político a la hora de desembarcar en una u otra.

En segundo lugar, en que el particular juego de equilibrios que resulta de la desintegración de UCD permitió que la ansiada «mayoría natural» se hiciera realidad, sólo en el nivel parlamentario, con la consecución del gobierno autonómico mucho antes de que AP fuese capaz de articularla. Este hecho fue determinante para que el partido transitase un camino que pocos podían imaginar a la muerte del dictador: sin posibilidad de un mayor deslizamiento hacia su derecha —producto de la progresiva desaparición de la extrema derecha organizada políticamente— y gracias a la ausencia de competencia en el que era su espacio político propio, pudo evolucionar del autoritarismo al constitucionalismo, pasando por la lucha por el centro y la defensa de la *galeguidade*, que el partido asumió, no sin dificultades, desde la etapa en que X. L. Barreiro ocupó la secretaría general.

Y, finalmente, en esa asunción del hecho diferencial gallego, que recién desembarcado Fraga a finales de los ochenta sólo parecía tener como límite infranqueable el ejercicio del derecho de autodeterminación, que además de inconstitucional era considerado por aquel profundamente «anacrónico». En este sentido, si la propuesta de «Administración única» parecía plausible y podía dotarse de un indudable contenido político, conceptos como el de «autoidentificación»

carecieron de virtualidad real más allá del mero ejercicio retórico y de la intención de bloquear cualquier posibilidad de consolidar una alternativa nacionalista de centro-derecha situada fuera de la órbita de AP, lo que en verdad no era poco teniendo en cuenta lo que estuvo a punto de representar CG. Semejante pragmatismo y flexibilidad ideológica, que sin embargo no pueden interpretarse sólo en términos de oportunismo político, permitieron conjurar, a base de inestables pactos de amplio recorrido, el peligro de fragmentación del centro-derecha reformista y ocupar un espacio político que en determinados momentos llegó a abarcar desde el centro izquierda hasta la extrema derecha, pasando por quienes se encontraban en los límites del nacionalismo moderado.

Dicho tránsito no fue sólo el resultado de una evolución autónoma e incondicionada de los dirigentes de AP, sino también de la incorporación de sectores procedentes de la extinta UCD con suficiente carisma y apoyos como para modular la praxis política y el discurso de los líderes aliancistas gallegos. Se trató de un proceso concurrente que afectó tanto a las elites parlamentarias autonómicas –las primeras en conjurarse para reforzar la inestable mayoría cosechada por los conservadores en 1981– como a las provinciales y locales, mediante el lento y desigual goteo a nivel provincial de alcaldes centristas que contribuyeron de forma decisiva a extender los apoyos y la organización local del partido por toda la geografía gallega. El período álgido de este proceso, con excepción de la provincia de Ourense, donde se dilata casi una década, se desarrolló en menos de un trimestre, entre la anunciada decisión de disolver la UCD y la publicación de las candidaturas para las elecciones locales del 8 de mayo de 1983.

Este trasvase respondió a intereses y motivaciones de lo más diverso y diferentes fueron, asimismo, sus consecuencias. En términos generales fue el resultado de una decisión estratégica destinada a maximizar las ventajas electorales para ambas partes a costa de sacrificar los

principios ideológicos que decían representar, por lo demás suficientemente elásticos según se ha apuntado. Las élites centristas se beneficiaban del paraguas y de los recursos económicos que ponían a su disposición las siglas conservadoras y a la vez eliminaban a los competidores situados a su derecha; las aliancistas lo hacían del predicamento de que disponían las anteriores en sus respectivos ámbitos de influencia, a la vez que extendían o densificaban sus redes en circunscripciones en las que gozaban de escasa o nula implantación.

El problema, a corto y medio plazo, residió en la forma en que se produjo la integración de una parte de las mismas: la exigencia de conservar su vitola de «independientes» y, sobre todo, el mantenimiento de unas siglas diferenciadas actuaron en menoscabo de la unidad interna de la organización aliancista gallega y favorecieron el surgimiento de enfrentamientos que a escala local superaron el más puro cainismo. A largo plazo, en cambio, resultó acertada en la medida en que el renacido Partido Popular pudo culminar en Galicia, cuatro años después de su *refundación*, la consecución de la ansiada «mayoría natural» bajo unas mismas siglas y con ello poner fin a los enfrentamientos tribales que habían dividido tradicionalmente al centro-derecha en Galicia. El asunto resultó paradójico en un doble sentido. Por un lado, sólo pudo alcanzarse después de asumir el de Villalba la suerte reservada a Moisés: tras haber guiado a sus huestes por la larga travesía del desierto, no pudo entrar en la tierra prometida del Palacio de la Moncloa y hubo de conformarse con el de Raxoi, situado, eso sí, frente a la fachada barroca de la catedral compostelana. Por otro, semejante logro, aunque anhelado, fue más el producto de las erradas decisiones de sus competidores que de una estrategia de partido meditada y ejecutada conforme a la partitura perfilada por el fundador.



FRENTE Ó ESTATUTO DA U.C.D.
**AUTÉNTICA
 AUTONOMÍA**
 4 DE NADAL: MANIFESTACIÓN

**PCG, PG, POG, PSG, PS_{de} G-PSOE,
 CC.OO., UGT, USO, SGS, CTG**

- ¹ «¡Un poco de formalidad!», ABC, 02/IV/1970, p. 3.
- ² Discurso de Valladolid del 4 de mayo de 1972 (ABC, 6-V-1972, pp. 37-39).
- ³ GALLEGO, Ferrán, *El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977)*, Barcelona, Crítica, 2008, p. 9; CABEZAS, Octavio, *Manuel Fraga: semblanza de un hombre de Estado*, Barcelona, Organización Sala, 1976, pp. 263 y ss.
- ⁴ M. Penella (*Los orígenes y la evolución del Partido Popular. Una historia de AP (1973-1989)*, Salamanca, Caja Duero, 2005, 2 vols.) discrepa de la interpretación dominante que relaciona a GODSA con Fraga desde sus orígenes. También considera que GODSA y RD representaban el modelo liberal-democrático que debía inspirar a AP pero que al final quedó distorsionado por la imperiosa necesidad de integrar a la derecha neofranquista [vid., en este sentido, el distinto enfoque de AP como representante de una nueva extrema derecha nacional-populista o alejada de ella que se desprende, respectivamente, de: GALLEGO, Ferrán, *Una patria imaginaria. La extrema derecha española (1973-2005)*, Madrid, Síntesis, 2005; y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, *Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982)*, Madrid, CSIC, 1994].
- ⁵ CIERVA, Ricardo de la, *La derecha sin remedio (1801-1987). De la prisión de Jovellanos al martirio de Fraga*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987, p. 331.
- ⁶ ABC. *Blanco y negro*, 19-VII-1978, p. 28.
- ⁷ La cita en *Informaciones*, 26-VIII-1975, p. 5; vid., asimismo, ABC, 26-VIII-1975, p. 7.
- ⁸ Vid. *La Voz de Galicia*, 13-IV-1976, pp. 17 y 19.
- ⁹ DEL RÍO MORILLAS, Miguel A., ob. cit., p. 166.
- ¹⁰ Sobre el contenido de lo que finalmente fue presentado como el «plan Arias-Fraga» vid. SOTO CARMONA, Álvaro, *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Madrid, Alianza, 2005, pp. 59-61. OTERO NOVAS, José Manuel, *Nuestra democracia puede morir*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987, pp. 28-29; la justificación del abandono en p. 27.
- ¹¹ Citamos por FRAGA IRIBARNE, Manuel, *Legitimidad y Representación*, Barcelona, Bruguera, 1975, pp. 217 y ss. Vid., asimismo, FRAGA IRIBARNE, Manuel, *El desarrollo político*, Barcelona, Grijalbo, 1972².
- ¹² *La Vanguardia Española*, 7-VII-1076, p. 5.
- ¹³ Este es el relato que ha transmitido Areilza en sus memorias y que da por bueno E. M. García-Guereta (vid. Areilza, José M.^a de, *Cuadernos de la transición*, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 42 y ss.; GARCÍA-GUERETA RODRÍGUEZ, Elena María, *Factores externos e internos en la transformación de los partidos políticos: el caso de AP-PP*, Tesis doctoral presentada en la UAM, Madrid, 2001, p. 82). Probablemente, la decisión de apostar por lo que luego sería AP ya estaba tomada desde su retiro de Perbes a juicio de BAÓN, Rogelio, *Historia del Partido Popular I. Del franquismo a la refundación*, Madrid, Ibersaf, 2001, p. 119.
- ¹⁴ VELO DE ANTELO, José María, *De ayer a hoy. Los orígenes del Partido Popular*, Madrid, Ed. Galland Books, 2010, p. 154.

- ¹⁵ FRAGA IRIBARNE, Manuel, *En busca del tiempo servido*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 58-59.
- ¹⁶ DEL RÍO MORILLAS, Miguel A., *De la extrema derecha neofranquista a la derecha conservadora: los orígenes de Alianza Popular (1973-1979)*, tesis doctoral presentada en la UAB, 2013, p. 31.
- ¹⁷ ABC, 2-XII-1976, p. 17.
- ¹⁸ Sobre las propuestas programáticas e ideológicas de la formación, vid. la tesis doctoral de GARCÍA-GUERETA RODRÍGUEZ, Elena María, *Factores externos e internos en la transformación de los partidos políticos. El caso AP/PP*, Madrid, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2001, pp. 204 y ss.
- ¹⁹ LAGARES DÍAZ, Nieves, *Génesis y desarrollo del Partido Popular de Galicia*, Madrid, Tecnos, 1999, p. 89-90.
- ²⁰ VELO DE ANTELO, José María, ob. cit., p. 223.
- ²¹ Cfr., por ejemplo, lo que al respecto sostienen los testimonios citados en LAGARES DÍAZ, Nieves, ob. cit., p. 93 y lo afirmado por J. M^a.Velo (ob. cit., pp. 225-226). Vid. asimismo, el cap. IV de la obra de LÓPEZ NIETO, Lourdes, *Alianza Popular. Estructura y evolución electoral de un partido conservador (1976-1982)*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI, 1988; y BAÓN, Rogelio, *Historia...*, p. 110.
- ²² *Informaciones*, 30-XII-1976.
- ²³ ABC, 5-VI-1976, p. 1. La posibilidad de nombrar gobernadores para tener así una presencia ulterior en provincias fue uno de los elementos que valoró GODSA para aceptar la participación en el Gobierno como reconoce el propio BAÓN, Rogelio, ob. cit., p. 77. No menos expeditivo se mostraría Rodolfo Martín Villa dos meses más tarde cuando nombró a veinte nuevos gobernadores civiles a los que encargó «cuidar de la autoridad del Estado y del prestigio del Gobierno» (ABC, 12-VIII-1976, p. 5).
- ²⁴ DEL RÍO MORILLAS, Miguel A., ob. cit., pp. 401 y 593.
- ²⁵ LÓPEZ NIETO, Lourdes, ob. cit., pp. 212-213.
- ²⁶ LAGARES DÍAZ, Nieves, ob. cit., pp. 110-111.
- ²⁷ *La Voz de Galicia*, 8-V-1977, pp. 13 y 30.
- ²⁸ LÓPEZ NIETO, Lourdes, ob. cit., p. 88.
- ²⁹ Vid. PRADA RODRÍGUEZ, Julio, «La transición política en Galicia. Una aproximación», en *La transición a la Democracia en España. Historia y Fuentes documentales*, ANABAD, Guadalajara, 4-7 de noviembre de 2003, edición en CD ROM; JUANA LÓPEZ, Jesús de y PRADA RODRÍGUEZ, Julio, «La Transición política y la Galicia postautonómica», en J. Juana y J. Prada (coords.), *Historia Contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 353-390. Algunas de las primeras aproximaciones al proceso electoral y al inicial subsistema de partidos políticos en Galicia que merecen ser destacadas son: RIVAS, Manuel y TAIBO, Xoán Ignacio, *Os partidos políticos na Galiza*, Edición do Rueiro, A Coruña, 1977; GONZÁLEZ ENCINAR, José Juan, *Galicia. Sistema de Partidos y comportamiento electoral, 1976-1981*, Ed. Akal, Madrid, 1982; SEQUEIROS, José Luis, *O muro fendido. Cambio social e comportamento político en Galicia*, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1993; LÓPEZ MIRA, Álvaro X, *Territorio e Democracia. Un modelo de participación democrática para Galicia, nacionalidade histórica*, Edición do Castro, Sada-A Coruña, 1996.
- ³⁰ VILAS NOGUEIRA, José, *Las elecciones en Galicia (1976-1991)*, Working Paper núm. 57, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 1992, pp. 18-19.
- ³¹ AREILZA, José María de, *Diario de un ministro de la Monarquía*, Barcelona, Planeta, 1977, p. 194.
- ³² MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo, «La transición local en Galicia: continuidad de las elites políticas del franquismo y renovación de los gobiernos locales», *Revista de Estudios Políticos*, 80, abr-jun 1993, pp. 82 y ss.
- ³³ Para profundizar en esta cuestión remitimos a PRADA RODRÍGUEZ, J., «Orígenes y gestión del proceso autonómico gallego», *Anales de Historia Contemporánea*, 20, 2004, pp. 237-256.
- ³⁴ RIVASTROITIÑO, Xosé M., *Conversas de Xosé Luis Barreiro Rivas con Xosé M. Rivas Troitiño*, Vigo, Ed. Sept, 1983, pp. 106 y 114-115.
- ³⁵ Cfr., por ejemplo, la posición al respecto de la mayoría de los delegados en el congreso provincial de A Coruña (*La voz de Galicia*, 4-IX-1979, p. 29). A juicio de R. Baón, se había fomentado la creación de un partido *sucursalista* mediante el control que de las juntas locales y provinciales ejercían unos secretarios técnicos retribuidos desde Madrid para disuadir de la formación de «cacicatos locales» (ob. cit., p. 323).
- ³⁶ RODRÍGUEZ, Carlos Luis, *El Parlamento Gallego. Diciembre 1981. Historia de un proceso político*, A Coruña, La Voz de Galicia, 1981, p. 31.
- ³⁷ BLANCO VALDÉS, Roberto Luis et al., *Las elecciones en Galicia. I. El Parlamento Gallego*, A Coruña, Ediciones Nos, 1982, p. 23.
- ³⁸ LAGARES DÍAZ, Nieves, ob. cit., p. 179.
- ³⁹ Esto explica, junto con la mayor presencia anterior de AP, que el electorado de procedencia UCD que votó a la coalición AP-PDP fuese 13 puntos inferior a la media española (MONTERO, José R., «El sub-triunfo de la derecha: los apoyos electorales de AP-PDP», en LINZ, Juan J. y MONTERO, José R. (eds.), *Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta*, Madrid, CEC, 1986, p. 358.
- ⁴⁰ BAÓN, Rogelio, ob. cit., p. 408.
- ⁴¹ JUANA LÓPEZ, Jesús de y PRADA RODRÍGUEZ, Julio, «La dinámica política de la Galicia post-autonómica», en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 28, 2006, p. 329.
- ⁴² No sería hasta julio de 1993, dos años después de la disolución de los *Centristas de Galicia* (CdeG) de Victorino Núñez, cuando se cerró el proceso de recomposición del centro-derecha en la provincia con la elección de una ejecutiva paritaria al 50% entre los aliancistas históricos y quienes en la transición habían militado en UCD y más tarde en *Centristas de Ourense*, CG y CdeG.



Meilán Gil, líder de UCD, en una manifestación de todas las fuerzas políticas en Ferrol en el año 1977
(Fotografía de Anna Turbau)